

SEÑOR:
JUEZ ADMINISTRATIVO DE CIRCUITO DE CALI.
E.S.D

REFERENCIA: DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA.

DEMANDANTES: ALBA LUCIA MENDOZA MARIN en nombre propio e identificada con la cedula de ciudadanía número 31.640.344 de Buga a nombre propio y en representación de su hija menor de edad LAUREN SOFIA ALDERETE MENDOZA, WALTER ALDERETE CASTRILLON identificado con la cedula de ciudadanía número 2.473.126 de Ansermanuevo Valle en calidad de compañero permanente y padre de la menor.

DEMANDADOS: LA NACIÓN, MINISTERIO DE SALUD, SUPER INTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. COOMEVA E.P.S. FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA. COOMEVA E.P.S

MELBA VICTORIA PELAEZ GÓMEZ, mayor de edad y vecina de esta ciudad, abogada en ejercicio identificada con la tarjeta profesional No. 97.255 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, identificada con la cédula de ciudadanía No. C.C. 30.329.126 de Manizales, actuando en calidad de apoderada judicial de los de los señores ALBA LUCIA MENDOZA MARIN identificada con la cedula de ciudadanía número 31.640.344 de Buga quien representa a su hija menor LAUREN SOFIA ALDERETE MENDOZA y WALTERALDERETE CASTRILLON identificado con la cedula de ciudadanía número 2.473.126 de Ansermanuevo Valle en calidad de compañero permanente y padre de la menor me permito presentar ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA , para que bajo los fines y términos señalados en la ley el despacho se pronuncie sobre las siguientes pretensiones de mis representados las que más adelante formularé; con ocasión de la amputación iatrogénica de la vía biliar en la realización de la cirugía colecistectomía abierta realizada por la Doctora VIVIAN MIRANDA ESCANDON en las instalaciones del HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA y cubierto por la entidad prestadora de salud COOMEVA E.P.S a la señora ALBA LUCIA MENDOZA MARIN. Previa a una demanda de ACCIÓN REPARACIÓN DIRECTA en contra de la Nación MINISTERIO DE SALUD, SUPER INTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. COOMEVA E.P.S. FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA.

PRETENSIONES

PRIMERA. Que se declare por el respetado juzgado que los demandados, LA NACIÓN, FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA, MINISTERIO DE SALUD, SUPER INTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. COOMEVA E.P.S son administrativamente y jurídicamente responsables de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes, por falla en el servicio durante la prestación del servicio de salud requerido por la señora ALBA LUCIA MENDOZA MARIN.

SEGUNDA. : Que se condene en consecuencia, como reparación del daño ocasionado a LA NACIÓN, FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA, MINISTERIO DE SALUD, SUPER INTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. COOMEVA E.P.S a responder por los perjuicios morales, materiales, subjetivos y objetivados actuales y futuros (daño emergente, lucro cesante) causados con ocasión de la omisión y falla en la prestación del servicio de salud de la señora ALBA LUCIA MENDOZA MARIN; los cuales se estiman en principio en la suma de 235 salarios mínimos legales mensuales vigentes o la suma actual de ciento cincuenta millones de pesos de acuerdo a lo que se pruebe dentro del proceso.

TERCERA: Que se ordene la indemnización y la fecha de pago de la misma por concepto de perjuicios a la salud , perjuicios morales o extra patrimoniales causados por la zozobra, angustia, afectación psicológica, daños en la vida de la familia ocasionados por los malos resultados en la cirugía practicada a la señora ALBA LUCIA MENDOZA MARIN denominada COLAP colecistectomía abierta y que tuvo las complicaciones que serán descritas en los hechos que se redactaran para la afectada (paciente, cónyuge e hija.)

CUARTA: Que el juzgado condene a los demandados LA NACIÓN, FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA, MINISTERIO DE SALUD, SUPER INTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. COOMEVA E.P.S a proceder al pago de los daños en su modalidad de perjuicios morales y daño en la vida de relación de los demandantes, La condena respectiva será actualizada de acuerdo a lo previsto en el artículo 187 del C.P.C.A teniendo en cuenta en la respectiva liquidación, la variación promedio

mensual del índice de precios al consumidor (IPC), desde la fecha en que se presentaron los hechos hasta aquella en la cual quede ejecutoriado el fallo definitivo.

Cuarta. La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 189, 192, 195 del C.P.A.C.A

Quinta. Que se profiera condena en costas de conformidad al artículo 188 del C.P.A.C.A.

HECHOS Y OMISIONES

PRIMERO: Según consta en la copia de la cédula de la señora **ALBA LUCIA MENDOZA MARIN** en declaración extra juicio realizada por ella y su compañera **WALTER ALDERETE CASTRILLON** y en el registro civil de la menor **LAUREN SOFIA ALDERETE MENDOZA**, la edad de la señora **ALBA LUCIA MARIN** es actualmente de 36 años y su núcleo familiar está compuesto por su compañero permanente y su hija menor de edad.

SEGUNDO: Tal y como consta en la historia clínica a la señora **ALBA LUCIA MENDOZA MARIN**, le diagnosticaron a principios del año 2014, la presencia de cálculos biliares por lo que le fue ordenada una laparoscopia.

TERCERO: Según lo manifiesta la señora **ALBA LUCIA MENDOZA**, le iban a realizar cirugía por laparoscopia por presentar cálculos en la vesícula, así se puede evidenciar en la hoja quirúrgica del 2 de febrero de 2014 “procedimiento **“COLICESTOCMIA POR LAPAROSCOPIA “**

CUARTO: El día 2 de febrero de 2014, mi poderdante fue ingresada al quirófano en el **HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA**, donde se le realizó una cirugía abierta, según se puede evidenciar en la historia clínica diferente a la programada por los galenos.

QUINTO: Manifiestan mis poderdantes que al día siguiente de la cirugía la hoy demandante se nota ictericia, consulta con los médicos del hospital **SAN JOSE DE BUGA** Y se le diagnóstica “Paciente con tinte icterico, algico, polipneica... Distensión y marcado dolor abdominal difuso, difícil de valorar por antecedente quirúrgico reciente”

SEXTO: La señora **ALBA LUCIA MENDOZA MARIN**, fue remitida a la Clínica de Occidente donde le realizaron un examen denominado **CEPER** el que arrojó como resultado “riesgo elevado de sangrado interno”.

SEPTIMO: Los días posteriores a la cirugía la señora Alba Lucia Presentaba deposiciones y vomito con sangre

DECIMO PRIMERO. El día 14 de febrero de 2014, la señora **ALBA LUCIA MENDOZA MARIN** es trasladada a la fundación Valle del Lili y se registra en el momento de su ingreso: Paciente en post operatorio de colecistectomía abierta remitida de Clínica Occidente con historia de aparición de ictericia obstructiva, documentándose por escanografía una colección hacia el hipocondrio derecho y con la colangioendoscopia retrograda una lesión del conducto biliar principal. Se trae a cirugía con el plan de drenar el bilioperitoneo y realizar reconstrucción de vías biliares.

DECIMO SEGUNDO: En la Fundación Valle del Lili El 15 de febrero de 2014, se registra en la historia clínica en lesión de sitios contiguos de las vías biliares en la EL Doctor **WILSON VILLAMIL GUERRERO** describe: **IATROGENIA DE LA VIA BILIAR DX PREQX: ESTENOSIS DE VIA BILIAR - BILIOPERITONEO.**

DECIMO TERCERO: Según se desprende de la historia clínica el 17 de febrero de 2014 se realiza la reconstrucción de la vía biliar por lesión **IATROGENICA** Extra institucional, hepático yeyunostomía y de roux en una sola boca

DECIMO CUARTO: La paciente es dada de alta el 22 de febrero de 2014 y ahí como lo relata ella su vida ha estado acompañada de incesantes y graves sufrimientos, Con la mala praxis médica por la impericia de los profesionales de la salud de la Fundación Hospital San José de Buga y **COOMEVA EPS** se ha causando un grave detrimento físico.

emocional y económico a la señora **ALBA LUCIA MENDOZA MARIN** y a su familia que le impide llevar la vida normal como lo hacía antes de la intervención quirúrgica donde se le causo la amputación de las vías biliares y la cual se debió a una falla medica por parte de los galenos del Hospital San José de Buga.

DECIMO QUINTO: A Mi poderdante la señora y a su familia les cambio completamente su vida desde el día de la cirugía puesto que la economía familiar se ha visto bastante afectada como consecuencia de la incapacidad de trabajar de la hoy convocante, situación que aún persiste y que causa serios perjuicios morales, domésticos, familiares y económicos.

DECIMO SEXTO:, falta de diligencia, prudencia y cuidado de los demandados al practicar indebidamente el procedimientos anotados en este libelo, son la causa de los graves daños materiales, morales, de relación e inclusive con violación al derecho de la salud en conexidad con la vida de la señora **ALBA LUCIA MENDOZA MARIN** y su familia.

DECIMO SEPTIMO: Los daños morales, sufridos por mi poderdante y su familia dadas las consecuencias del error médico, con problemas irreversibles para su vida amén del padecimiento e incertidumbre, ansiedades y depresiones y el daño a la salud de **ALBA LUCIA MENDOZA MARIN** están estimados en (232) salarios mínimos legales mensuales \$ 150.000.000 ciento cincuenta millones de pesos.

DECIMO OCTAVO: Ha de tenerse en cuenta para la valoración de los perjuicios que la señora **ALBA LUCIA** queda con una limitación funcional, una gran cicatriz y gran flacidez en su abdomen como consecuencia de la falla médica, en el momento actual y su vida futura no será igual.

DECIMO NOVENO: Hasta la fecha la estimación de los perjuicios materiales ascienden como mínimo en la modalidad de lucro cesante, daño emergente una cuantía de: (2.000.000) a dos millones de pesos.

VIGESIMO: El resarcimiento de los perjuicios causados a favor de mis poderdantes se determinará en el correspondiente acápite; los cuales nacen de la necesidad de la reparación como resultado del detrimento sufrido, por la certeza del perjuicio; por cuanto el resarcimiento no consiste en otra cosa que en reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio.

La suma total de perjuicios morales y materiales asciende a la suma de (152.000.000) millones de pesos o 235 salarios mínimos legales mensuales vigentes) o la suma actual de setecientos dieciocho millones doscientos veinte dos mil quinientos pesos (\$718.222.500)

ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA

La estimo en (235) salarios mínimos legales mensuales vigentes) o la suma actual de ciento cincuenta millones de pesos (\$150.000.000).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Constitución Nacional artículos 90 y 91, ley estatutaria 270 de 1996 artículos 65,66,67,68,69,70,71,74, artículo 140, 166, 187, 189, 192 del C.P.A.C.A.
- Sentencias Consejo de Estado:
C.E Secc tercera 66001233100020010073101
2600020000034001 (28832) de Agosto 28 de 2014.

RAZONES DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES:

Dentro del art. 90 de la C.P. se encuentran comprendidas tanto la responsabilidad contractual como extracontractual del estado. Se deben dos requisitos para determinar tal responsabilidad: a) El daño jurídico y b) Que la acción u omisión le sean imputables a la autoridad pública. Así lo manifiesta la Sección Tercera, del Honorable Consejo de Estado, en sentencia de mayo 8 de 1995.

La responsabilidad estatal aflora independientemente que la conducta del funcionario, sea esta dolosa o culposa.

Que la conducta del agente estatal sea lícita o no, no son factores que determinan la antijuricidad del daño, como lo ha también manifestado la Corte Constitucional en la Sentencia 899 de 2003.

Se genera entonces, una responsabilidad patrimonial del estado, no para que se elimine o suprima la culpa, sino para que recaiga sobre el patrimonio de la administración misma, el daño que ha sufrido el particular.

La falla en el servicio, es una responsabilidad directa que produce un daño, como consecuencia de la conducta desplegada por una persona pública, que para el presente caso, ha actuado mal; responsabilidad que igualmente, encuentra sustento legal, en el art. 2341 del C.C.

La Corte Constitucional ha expresado que "El Estado de Derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado" (C-832 de 2001); lo cual, aunado a la legitimidad de mi procurada y a que no ha operado el término de caducidad para reclamar falla en el servicio, como lo dispone el art. 136 del C.C.A, modificado por el art. 44 de la Ley 446 de 1998, hace que se encuentren presentes todos los elementos para exigir tal reparación, tanto en lo material como en lo moral.

El daño para su reparación, ha de ser antijurídico, propio, cierto y evaluable, como lo ha expresado el honorable Consejo de Estado, en sentencia, como la 11179 de 1998; requisitos que se reúnen en el presente evento; de la misma manera, en sentencia de enero de 2002, planteó, que para la reparación se requiere de la existencia del perjuicio, que este debe ser directo, actual y cierto; y que pueda ser indemnizado el daño futuro, teniendo como presupuesto la certidumbre del daño mismo.

El art. 2º de la C.P., consagra que las autoridades de la república, están instituidas para proteger a todas las personas que residan en el país, entre otros, en su vida, derecho fundamental y del cual se desprenden los demás, inherentes al ser humano, derecho al que se refiere el art. 11 de la carta magna.

El daño es todo menoscabo sufrido por una persona en su integridad física, emocional o en sus bienes; como consecuencia de ello, se manifiesta también el daño moral, perjuicio que sufre en su dignidad, honorabilidad, o cualquier elemento que conlleve una alteración de la normalidad facultativa mental o espiritual; así, en relación con el daño moral, ha expresado el Honorable Consejo de Estado, que para que haya lugar a tal reparo, basta que el padecimiento sea fundado, sin requerimiento de acreditación adicional, correspondiéndole al Juez, de manera discrecional establecer tal cuantía, con base en las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. (Sentencia 1182 de 2000 Secc. Tercera) y finalmente, que la reparación ha de ser íntegra, en equidad y observando los criterios actuariales.

Ha de ser apreciado el daño a la vida de relación, que ha de materializarse en compensación, término con el cual precisa el Honorable Consejo de Estado, la respectiva indemnización ante este perjuicio extrapatrimonial, perjuicio, que se manifiesta en la vida exterior del afectado o de los allegados, en este caso, de la esposa, por el deceso de su compañero, al perder su protección y apoyo. (Sentencia 11842 de 2000).

En este caso hay una acción por parte del cirujano durante la intervención, en una paciente que se le provoca una amputación de la vía biliar (daño) que determina afectación importante en la salud de la paciente, que previamente había ingresado a sala de cirugía para una cirugía programada (no urgencia), y sale de sala de operaciones con su vía biliar amputada, de tal manera que se establece claramente una relación de causa- efecto entre la intervención quirúrgica y la lesión de la vía biliar.

Las lesiones iatrogénicas de las vías biliares (LIVB) son una contingencia infrecuente. En este caso, la sección del conducto hepático común, se considera una lesión iatrogénica, que la literatura médica ha considerado, por factores técnicos. Maingot dice: "la colecistectomía fácil y un cirujano carente de adecuado entrenamiento quirúrgico, constituyen una combinación siniestra." La mayoría de las lesiones durante la colecistectomía se produce por confundir la vía biliar principal con el conducto cístico. Sobre todo cuando la vía biliar principal es fina, facilitada por la tracción excesiva de la vesícula sumada a la presencia de un conducto cístico corto. Esta confusión puede llevar a la sección

7

parcial, ligadura, laceraciones, quemaduras térmicas y su ulterior evolución a la estenosis así como a la resección parcial de la VBP. La sección del conducto, lleva a obstrucción biliar que inicialmente determina la formación de un exudado inflamatorio, que origina el depósito de colágeno y finalmente fibrosis con formación de cicatrices alrededor de los conductos biliares. Dicha fibrosis se acompaña de hiperplasia celular hepática. Esto puede determinar la evolución en 4 a 5 años a una cirrosis biliar secundaria. Aunque puede alcanzarse un tiempo antes de existir atrofia hepática concomitante.

También los conductos extra hepáticos sufren alteraciones por la fibrosis lo que determina la retracción, acompañado de atrofia de la mucosa, metaplasia escamosa, fibrosis a nivel subepitelial de los conductos fundamentalmente en obstrucciones de larga duración 2, 9. Trabajos en animales evidencian cambios morfológicos, ultraestructurales y bioquímicos posteriores a la injuria biliar.

Debemos tener en cuenta que durante el seguimiento de los pacientes importa no solamente la sobrevida sino también valorar la calidad de vida. A este respecto en un trabajo reciente prospectivo se analiza la calidad de vida a 5 años luego de lesión de vía biliar durante la colecistectomía laparoscópica. Hay estudios que han estudiado que la calidad de vida a largo plazo, tanto a nivel físico como mental es pobre. Se produce un deterioro significativo de las diferentes variables cuando se la compara tanto con el grupo de las colecistectomías laparoscópicas no complicadas como grupos controles.

Es evidente que en este caso se presentó lesión iatrogénica de la vía biliar con sección de conducto hepático común.

Para calificar dicho acto de conforme o no con la técnica normal requerida; encontramos además planteamientos de la corte suprema en torno a la culpa probada que mencionan lo siguiente: "si, entonces el médico asume, acorde con el contrato de prestación de servicios celebrado, el deber jurídico de brindar al enfermo asistencia profesional tendiente a obtener su mejoría, y el resultado obtenido con su intervención es la agravación del estado de salud del paciente que le causa un perjuicio específico, este debe, con sujeción a ese acuerdo, demostrar, en línea de principio, el comportamiento culpable de aquel en cumplimiento de su obligación, bien sea por incurrir en error diagnóstico o, como en este caso, de tramamiento, lo mismo que probar adecuada relación causal entre la dicha culpa y el daño por el padecido"; Hay evidentemente un daño causado por la intervención, generándose así responsabilidad civil médica.

El Consejo de Estado en jurisprudencia reciente invierte la carga de la prueba en el sentido de: "ahora bien, por norma general le corresponde al actor la demostración de los hechos y cargos relacionados con la demanda. Sin embargo, con mucha frecuencia se presentan situaciones que le hacen excesivamente difícil cuando no imposible, las comprobaciones respectivas, tal es el caso de las intervenciones médicas, especialmente quirúrgicas, que por su propia naturaleza, por su exclusividad, por la privacidad de las mismas, por encontrarse en juego intereses personales o institucionales, etc., en un momento dado se constituyen en barreras infranqueables, para el paciente, para el ciudadano común obligado procesalmente obligado a probar aspectos científicos o técnicas profesionales sobre las cuales se edifican los cargos que por imprudencia, negligencia o impericia formula en el ejercicio de una determinada acción judicial, contra una institución encargada de brindar servicios médicos u hospitalarios. Sin duda resultaría más beneficioso para la administración de justicia en general, resolver esta clase de conflictos, si en lugar de someter al paciente, normalmente el actor o sus familiares, a la demostración de las fallas en los servicios, o técnicas científicas, prestadas por especialistas, fueran estos, los que por encontrarse en mejores condiciones de conocimiento técnico y real por cuanto ejecutaron la respectiva conducta profesional, quienes satisficieran directamente las inquietudes y cuestionamientos que contra sus procedimientos que contra sus procedimientos se formulan. Podrán así los médicos exonerarse de responsabilidad y con ello los centros clínicos que sirven al paciente, mediante la comprobación, que para ellos, se repite, es más fácil y práctica, de haber actuado con la eficacia, prudencia o idoneidad requeridas por las circunstancias propias del caso concreto, permitiéndole al juzgador un mejor conocimiento de las causas, procedimientos, técnicas, o motivos que llevaron al profesional a asumir determinada conducta o tratamiento")

Con respecto a la inversión de la carga de la prueba se establece que el precedente jurisprudencial sobre la carga de la prueba en asuntos de responsabilidad médica no se puede desconocer ya que en los asuntos mencionados la prueba se invierte cuando a la

parte demandante es difícil o prácticamente imposible demostrar la causalidad. (C.E, SEC SEGUNDA SENT 11001031500020120153600 MP Alfonso Vargas Rincón).

Competencia de jurisdicción administrativa adquirida por fuero de atracción es definitiva

Dicha figura permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo asuma el juzgamiento de una entidad que normalmente debe ser juzgada por la justicia ordinaria, siempre que sea demandada ante el contencioso administrativo junto con otra entidad cuyo juzgamiento si corresponda a ésta jurisdicción.

La teoría del fuero de atracción es una construcción jurisprudencial que, en la última etapa de su desarrollo, ha aceptado que la jurisdicción contencioso administrativa conserva su competencia para declarar la responsabilidad de una persona pública o privada atraída, incluso cuando sea exonerada de la obligación de reparar.

De acuerdo con la Sección Tercera del Consejo de Estado, esto obedece a que la jurisdicción administrativa adquiere la competencia en forma definitiva y no provisional ni condicionada.

El alto tribunal recordó lo señalado en la Sentencia 12916 del 2003, según la cual la competencia asignada a dicha jurisdicción en razón del fuero de atracción no está condicionada al éxito de las pretensiones, pues no se trata de una competencia 'provisional', ajena al esquema de la teoría del proceso. Por el contrario, dicho fuero implica que todas las partes puedan ser juzgadas por el mismo juez.

LEGITIMACIÓN DE LA CAUSA POR PASIVA.

MINISTERIO DE SALUD Y SUPER INTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.

MINISTERIO DE SALUD:

La Constitución Política de Colombia define en su artículo 48 que la Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

Uno de los caracteres esenciales de la noción de servicio público es su continuidad. Esto significa que la prestación respectiva no debe ser interrumpida siempre y cuando se den los presupuestos de razonabilidad para que el servicio se preste. Pero, la noción de continuidad no conlleva una definición absoluta, pues puede ser relativa, esta condición dependerá de cada caso concreto. Resulta claro que quien presta o realiza el servicio no debe efectuar acto alguno que pueda comprometer la continuidad del servicio público de salud y, en consecuencia la eficiencia del mismo. Es obligación primordial, tanto de las entidades estatales como de los particulares que participen en la prestación del servicio público de salud, garantizar su continuidad.

A la Nación, a través del Ministerio de Salud, le compete organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud, en ese sentido, es responsable cuando por falta de organización del servicio se causen daños, sin importar que dicho servicio sea prestado por un ente territorial o cualquier entidad del sector descentralizado por servicios.

- En lo que respecta a la **SUPER INTENDENCIA NACIONAL DE SALUD:**

La Ley 1122 de 2007 aprobada con el fin de realizar algunos ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios, incluye entre sus reformas o modificaciones algunas relacionadas con las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud. El capítulo VII, en su artículo 35, define las funciones de inspección, vigilancia y control de la siguiente forma:

- La inspección es el conjunto de actividades y acciones encaminadas al seguimiento, monitoreo y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que sirven para solicitar, confirmar y analizar de manera puntual la información que se requiera sobre la situación de los servicios de salud y sus recursos, sobre la situación jurídica, financiera, técnica-científica, administrativa y económica de las

entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud dentro del ámbito de su competencia. Son funciones de inspección entre otras las visitas, la revisión de documentos, el seguimiento de peticiones de interés general o particular y la práctica de investigaciones administrativas.

La vigilancia consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de Salud para advertir, prevenir, orientar, asistir y propender porque las entidades encargadas del financiamiento, aseguramiento, prestación del servicio de salud, atención al usuario, participación social y demás sujetos de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, cumplan con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud para el desarrollo de éste.

El control consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de Salud para ordenar los correctivos tendientes a la superación de la situación crítica o irregular (jurídica, financiera, económica, técnica, científico-administrativa) de cualquiera de sus vigilados y sancionar las actuaciones que se aparten del ordenamiento legal bien sea por acción o por omisión.

Dentro del art. 90 de la C.P. se encuentran comprendidas tanto la responsabilidad contractual como extracontractual del estado. Se deben dos requisitos para determinar tal responsabilidad: a) El daño jurídico y b) Que la acción u omisión le sean imputables a la autoridad pública. Así lo manifiesta la Sección Tercera, del Honorable Consejo de Estado, en sentencia de mayo 8 de 1995. La responsabilidad estatal aflora independientemente que la conducta del funcionario, sea esta dolosa o culposa.

Que la conducta del agente estatal sea lícita o no, no son factores que determinan la antijuridicidad del daño, como lo ha también manifestado la Corte Constitucional en la Sentencia 899 de 2003.

Se genera entonces, una responsabilidad patrimonial del estado, no para que se elimine o suprima la culpa, sino para que recaiga sobre el patrimonio de la administración misma, el daño que ha sufrido el particular.

La falla en el servicio, es una responsabilidad directa que produce un daño, como consecuencia de la conducta desplegada por una persona pública, que para el presente caso, ha actuado mal; responsabilidad que igualmente, encuentra sustento legal, en el art. 2341 del C.C.

La Corte Constitucional ha expresado que “El Estado de Derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado” (C-832 de 2001); lo cual, aunado a la legitimidad de mi procurada y a que no ha operado el término de caducidad para reclamar falla en el servicio, como lo dispone el art. 136 del C.C.A, modificado por el art. 44 de la Ley 446 de 1998, hace que se encuentren presentes todos los elementos para exigir tal reparación, tanto en lo material como en lo moral.

El daño para su reparación, ha de ser antijurídico, propio, cierto y evaluable, como lo ha expresado el honorable Consejo de Estado, en sentencia, como la 11179 de 1998; requisitos que se reúnen en el presente evento; de la misma manera, en sentencia de enero de 2002, planteó, que para la reparación se requiere de la existencia del perjuicio, que este debe ser directo, actual y cierto; y que pueda ser indemnizado el daño futuro, teniendo como presupuesto la certidumbre del daño mismo.

El art. 2° de la C.P., consagra que las autoridades de la república, están instituidas para proteger a todas las personas que residan en el país, entre otros, en su vida, derecho fundamental y del cual se desprenden los demás, inherentes al ser humano, derecho al que se refiere el art. 11 de la carta magna.

El daño es todo menoscabo sufrido por una persona en su integridad física, emocional o en sus bienes; como consecuencia de ello, se manifiesta también el daño moral, perjuicio que sufre en su dignidad, honorabilidad, o cualquier elemento que conlleve una alteración de la normalidad facultativa mental o espiritual; así, en relación con el daño moral, ha expresado el Honorable Consejo de Estado, que para que haya lugar a tal reparo, basta que el padecimiento sea fundado, sin requerimiento de acreditación adicional, correspondiéndole al Juez, de manera discrecional establecer tal cuantía, con base en las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. (Sentencia 1182 de 2000 Secc. Tercera) y finalmente, que la reparación ha de ser íntegra, en equidad y observando los criterios actuariales.

Ha de ser apreciado el daño a la vida de relación, que ha de materializarse en compensación, término con el cual precisa el Honorable Consejo de Estado, la respectiva indemnización ante este perjuicio extrapatrimonial, perjuicio, que se manifiesta en la vida exterior del afectado o de los allegados, en este caso, de la esposa, por el deceso de su compañero, al perder su protección y apoyo. (Sentencia 11842 de 2000).

En este caso hay una acción por parte del cirujano durante la intervención, en un paciente con una alteración congénita de su anatomía, que resulta en una amputación de la vía biliar (daño) que determina afectación importante en la salud del paciente, que previamente había ingresado a sala de cirugía para una cirugía programada (no urgencia), y sale de sala de operaciones con su vía biliar amputada, lo que lo lleva a consultar en dos oportunidades después de la cirugía y solo hasta la tercera oportunidad es que se pondera la signología y sintomatología, hospitalizándolo para estudio y aclaración del diagnóstico, encontrando el hallazgo imagenológico mencionado, de tal manera que se establece claramente una relación de causa- efecto entre la intervención quirúrgica y la lesión de la vía biliar.

RELACION PROBATORIA

DOCUMENTALES:

Me permito acompañar al presente libelo de los siguientes documentos:

- 1- Poderes debidamente conferido y copia de las cédulas de ciudadanía de los demandantes:
- 2- Copia del folio de Registro civil de nacimiento de la menor **LAUREN SOFIA ALDERETE MENDOZA**.
- 3- Copia de la Declaración extra juicio sobre la unión marital de hecho entre los demandantes.
- 4- Copia de la historia Clínica.
- 5- Certificado de Existencia y representación **COOMEVA E.P.S.**
- 6- Fotografías del estómago de la señora Alba Lucia Mendoza Marín, donde se pueden observar las condiciones finales de su estado (gran cicatriz, exceso de flacidez)
- 7- **PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PÚBLICO - Demanda. Anexos. Prueba de existencia y representación legal / PRUEBA DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL - Personas jurídicas de derecho público. Anexos de la demanda.**
 - A este respecto conviene destacar que según las voces del inciso 5 del artículo 166 del C.P.A.C.A., sólo debe acompañarse a la demanda como anexo la prueba de la existencia y representación legal de las personas jurídicas distintas de las de derecho público que intervengan en el proceso. O lo que es igual, el precepto en cita prevé la regla conforme a la cual no hay que acreditar la existencia y representación legal de las entidades públicas.

TESTIMONIOS:

- Para que al tamiz de la sana crítica y en conjunto con el universo probatorio den cuenta de la situación vivida por la familia **ALDERETE MENDOZA**, durante la época de los hechos y como afecto su vida hasta la actualidad.
- La señora **LUZ HELENA GUEVARA** identificada con la cédula de ciudadanía No 26.514.990 residente en la calle 10 No 3-48 Barrio Diego Rengifo del Municipio de Yotoco Valle de teléfono 313603454.
- A la señora **ISAURA FIGUEROA ROJAS** identificada con la cédula de ciudadanía No 29.951.764 residente en la carrera 4 No 9 -82 del Municipio de Yotoco. tel.: 3155406034.
- El señor **AZAEL GAVIRIA CARVAJAL**, identificado con la cédula de ciudadanía 10.566.155 residente en la cra 5 No 1-125 barrio Santa Bárbara teléfono 2524035.

INTERROGATORIO DE PARTE:

Sírvase señor juez decretar el interrogatorio de parte a la señora **ALBA LUCIA MENDOZA** identificada con cédula de ciudadanía No 31.640.344 quién podrá citarse en la calle 10 No 3-46 de Yotoco Valle. para que en audiencia, cuya fecha y hora se servirá Usted señalar, absuelva el interrogatorio de parte que personalmente le formularé.

COMPETENCIA

Es usted señor juez competente para conocer de este trámite de conformidad con lo prescrito en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ley 23 de 1999 artículo 59 y siguientes, ley 446 de 1998.

CUANTIA

- Los perjuicio, morales, a la vida de la relación, salud, deben ser estimados en la suma aproximada actual a los Ciento cincuenta y dos millones de pesos (**\$152.000.000**) o la suma de (235) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- Los perjuicios materiales (daño emergente, lucro cesante) ascienden a la suma de (2.000.000)

Cuantía total: (\$152.000.000) ciento cincuenta y dos millones de pesos o 235) salarios mínimos legales mensuales vigentes

NOTIFICACIONES

LA SUSCRITA:

- Recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho. Además la suscrita en la Carrera 4 no 10-44 oficina 403 teléfonos 8880949 8894810. PBX 5247071

LOS DEMANDANTES: calle 10 No 3-46 de Yotoco Valle

- **LOS DEMANDADOS:**

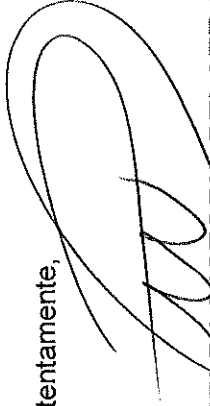
LA NACIÓN: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Carrera 7 No.75-66 Piso 2 y 3. Bogotá D.C.

- **MINISTERIO DE SALUD** NIT: 900.474.727-4 Carrera 13 No. 32-76 de Bogotá.

- **COOMEVA:** Cra 100 No 11-60 Local 14 Tel: 4858500 Cali.

- **HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA** Cra 8 No -52 teléfono 2375111-2361000

Atentamente,



MELBA VICTORIA PELAEZ GÓMEZ
C.C. 30.329.126 de Manizales.
T.P. 97.255 del C.S. de la J.